



Intersecciones de Cultura y Conflicto en La Guajira: Comunidades Indígenas y Narcotráfico Fronterizo

DIEGO ALEXANDER PÁEZ DÍAZ

Artículo para optar al título profesional:
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

| DATOS GENERALES | |
|-----------------------|---|
| Nombre del estudiante | : Diego Alexander Páez Díaz |
| Identificación | : C.C. 14.327.294 |
| Programa académico | : Maestría en Estrategia y Geopolítica |
| Tutor metodológico | : MY. (RA) Oscar Orlando Porras Rodríguez |
| Tutor temático | : PhD. Leonardo Hernández |
| Fecha de entrega | : 30 de agosto de 2025 |
| Extensión | : 7.217 |

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: [Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas](#).

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de [acceso abierto](#).

Intersecciones de Cultura y Conflicto en La Guajira: Comunidades Indígenas y Narcotráfico Fronterizo

Diego Alexander Páez Díaz¹
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”.

Resumen: La Guajira y su percepción como territorio fronterizo entre los Estados de Colombia y Venezuela ha adquirido una relevancia estratégica por las complejas interacciones sociales, culturales y conflictivas que allí se desarrollan. Las comunidades asentadas en esta zona han coexistido con una realidad marcada por la débil presencia estatal y la consolidación de actores ilegales, especialmente vinculados al narcotráfico, uno de los principales desafíos en la zona. En medio de esta labor, las comunidades han desempeñado un papel fundamental, no solo como receptores de las políticas, sino como agentes que influyen en su efectividad y adaptación territorial. Este trabajo tiene como objetivo, analizar cómo las comunidades indígenas y la población civil de La Guajira han impactado en la estrategia operativa para combatir el narcotráfico en la frontera Colombo-venezolana durante el periodo 2021-2024. Esto a través de una metodología cualitativa de revisión documental y una entrevista representativa de la comunidad. Como principales hallazgos se encuentra una desconexión entre los proyectos de la Fuerza Pública y los intereses emergentes de las comunidades de La Guajira.

Palabras clave: Frontera colombo-venezolana; La Guajira; Comunidades indígenas; Narcotráfico; Estrategia operativa; Actores ilegales; Geoestrategia.

Abstract:

La Guajira, situated on the border between Colombia and Venezuela, has acquired strategic relevance due to the complex social, cultural, and conflict-related dynamics unfolding in the region. Local communities in this area have long coexisted with a reality shaped by weak state presence and the consolidation of illegal actors, particularly those linked to drug trafficking—one of the region’s most pressing challenges. Within this context, communities have played a fundamental role not only as recipients of public policy but also as active agents shaping its effectiveness and territorial adaptation. This study examines how indigenous communities and the civilian population of La Guajira have influenced the operational strategy to combat drug trafficking along the Colombia–Venezuela border between 2021 and 2024. The analysis is based on a qualitative methodology that combines documentary review with an in-depth interview with a key community leader.

Keywords: Colombia–Venezuela border; La Guajira; Indigenous communities; Drug trafficking; Operational strategy; Illegal actors; Geostrategy.

¹ Información del profesional...

Introducción

Los espacios geográficos no poseen un carácter geoestratégico intrínseco; es la presencia humana y la manera en que se apropia del territorio lo que configura dinámicas que permiten atribuirles ese valor. En contextos donde la presencia del Estado es limitada, como en la región de La Guajira, esta apropiación cobra aún mayor relevancia para comprender la configuración del poder y los conflictos asociados al control territorial. Estas dinámicas adquieren una complejidad particular. Allí, la ausencia del control efectivo por parte del Estado colombiano ha permitido el desarrollo de formas alternativas de organización, interacción y poder que transforman su percepción como frontera. En esta región no solo convergen culturas, sino que se entrelazan distintas formas de entender y vivir el territorio, dando lugar a una frontera con características distintas a las que tradicionalmente se atribuyen a un espacio geoestratégico estatal.

En este orden de ideas, los intentos del Estado por implementar estrategias para contrarrestar el narcotráfico en La Guajira no pueden analizarse de forma aislada, sin considerar la influencia de la intersección cultural que caracteriza la región. El tejido social se convierte en un factor determinante para el éxito o el fracaso de estas estrategias. Al tratarse de una relación de mutua interacción, las comunidades no solo influyen en la implementación de las políticas, sino que también se ven profundamente afectadas por las medidas adoptadas por el Estado para controlar esta actividad.

Al comprender esta situación, es clave analizar cómo las comunidades indígenas desde sus interpretaciones, y la población civil, desde sus necesidades, han impactado en la estrategia operativa a partir de la lucha contra el narcotráfico en la frontera Colombo-venezolano durante el periodo 2021-2024, reconociendo que esta no se presenta como la única problemática de la región y que existen múltiples metodologías para abordar los

objetivos que le darían una respuesta a esta inquietud ¿Cómo las comunidades indígenas y la población civil de La Guajira han impactado en la estrategia operativa a partir de la lucha contra el narcotráfico en la frontera Colombo-venezolana durante el periodo 2021-2024?

Para realizar el análisis es pertinente conocer los conceptos clave de la investigación, entre ellos se destacan la estrategia operativa, la frontera como un espacio estratégico y, de manera central, la agencia de los actores que interactúan en un contexto donde se implementan programas de lucha contra el narcotráfico en La Guajira. En consecuencia, la teoría de gobernanza multiactor y la teoría de la agencia se integran para visualizar cómo la comunidad indígena y la población civil se convierten en participes en la efectividad de las estrategias operativas contra el narcotráfico al decidir cooperar o resistirse hasta desencadenar en un conflicto en una gobernanza que ya no le pertenece al monopolio del Estado, sino que se enmarca en sistemas de negociación. Desde Mayntz (1998 y 2006) el concepto de gobernanza se utiliza para hacer referencia “a los diferentes modos de coordinación social utilizados para proveer bienes colectivos o producir e implementar reglas vinculantes colectivamente” (Sotomayor, Rodrigues, Rodríguez, Wander, & Sánchez, 2023, p.38).

En concordancia con esta perspectiva contemporánea de gobernabilidad, se suman actores a la gobernanza a la planeación y ejecución de las políticas y estrategias geopolíticas, ya no se trata solamente de los Estados nacionales emitiendo órdenes y políticas públicas que den solución a las problemáticas, se requiere de la participación de las comunidades civiles en los organismos públicos para resolver problemas sociales o crear oportunidades sociales (Meuleman, 2008).

De esta manera, se puede inferir que la gobernanza ha evolucionado y depende de la agencia de los actores que habitan un espacio. En este sentido, “los sistemas de gobernanza se distinguen tres tipos de coordinación: la jerarquía, el mercado (sistemas de competición) y las redes (sistemas de negociación)” (Sotomayor et al., 2023). En estos tipos de gobernanza policéntrica y multiactor puede surgir la cooperación, la resistencia y el conflicto.

Con respecto a las teorías relacionadas con las estrategias operativas, se relaciona con la Doctrina del Ejército Nacional de Colombia cuya descripción se enfoca en el fortalecimiento del control territorial, la neutralización de grupos armados organizados (GAO) y la protección de la población civil a través de un enfoque conjunto, coordinado e interinstitucional (Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, 2024). En medio de este planeamiento se busca que la institución castrense realice estrategias operativas con enfoque holístico para apoyar a la población y garantizar la defensa del territorio como su misión constitucional lo propone.

Estos dos conceptos alineados, a la teoría de la frontera como un espacio clave en los procesos estratégicos permitirán analizar los procesos que ocurren en La Guajira como región limítrofe. En la teoría clásica, Friedrich Ratzel (1847) desde el determinismo geográfico dio luces sobre la particularidad en la que se debían entender estas zonas, pues las visualizó como un órgano del Estado, una entidad viva que crece y se expande de manera natural según sus necesidades geopolíticas (Ratzel, F. 2011). En esta misma línea, Rudolf Kjellén argumentó que las fronteras además de estar en constante movimiento tienen la facultad de reflejar la fuerza de los Estados en medio de la competencia con otros (Tunandero, O. 2001).

En el caso colombiano, la autora Margarita Serje, exploró como las zonas de frontera se configuraron como el revés del Estado a través de la historia, es decir, como espacios que se definieron a partir de sus propias dinámicas (Serje, 2005, p.16).

Desde una perspectiva más contemporánea, Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2013), en su obra *La frontera como método*, exploran las fronteras no solo como líneas divisorias entre Estados, sino que son espacios dinámicos donde se negocian y redefinen constantemente las relaciones de poder y autoridad, así como la negociación. Argumentan que las fronteras actúan como métodos de control y, al mismo tiempo, como zonas de interacción y transformación, lo que puede llevar a una dilución o reconfiguración de la autoridad estatal en estos territorios periféricos.

En el caso colombiano, “las zonas de frontera” se convirtieron en la “otra Colombia” aquella que se omite conscientemente de la geografía, al estar fuera del alcance se caracterizan como “inaccesibles, desarticuladas y conflictivas, representan un obstáculo para la integración y el desarrollo nacional. Al describir y diagnosticar estas regiones, invariablemente se hace referencia a una serie de categorías, que constituyen los supuestos implícitos de este relato” (Serje, 2012).

Sin embargo, el Estado ha sostenido una presencia en estos espacios con la apropiación de sus recursos, como lo menciona Serje, la ausencia del Estado es más una omisión consciente que le ha resultado conveniente al Estado, es decir las zonas de frontera se incluyen desde su exclusión, así “estas zonas, no solamente han estado siempre habitadas, sino que han sido históricamente objeto de múltiples proyectos de penetración y apropiación, que se ha venido llevando a cabo a lo largo de su historia moderna, de manera incontenible.” (Serje, 2012).

Metodología

La investigación se realizará desde un enfoque cualitativo, ya que a través de las variables interpretativas se busca dar respuesta a la problemática planteada, teniendo en cuenta que a través de ella se estudian fenómenos de manera sistemática, sin un orden específico o estricto del procedimiento (Hernández Sampieri, 2018). Como técnicas de investigación se utilizarán la revisión bibliográfica obtenidas de las principales bases de datos y una entrevista semiestructurada con un integrante y líder de la comunidad indígena involucrada en el estudio.

La elección de esta participante responde a un criterio de informante clave, pues su trayectoria como líderesa local le otorga una visión integral sobre las dinámicas sociales, culturales y de seguridad en La Guajira, lo que proporciona una alta potencia informativa y permite que, aun siendo una sola entrevista, se alcance suficiencia analítica para los objetivos del estudio. Esta entrevista permitirá obtener información directa y cualitativa sobre las vivencias, experiencias y puntos de vista de los actores clave, facilitando la comprensión de las dinámicas internas de la comunidad y las problemáticas que enfrenta.

Para el análisis de la entrevista se utilizó una codificación temática abierta, con un enfoque inductivo, permitiendo que las categorías emergieran directamente del discurso del entrevistado. El proceso se inició con una lectura exploratoria completa de la transcripción, seguida de una segunda lectura en la que se identificaron fragmentos significativos relacionados con los ejes de la investigación. A cada fragmento se le asignaron códigos iniciales que luego fueron agrupados en categorías temáticas más amplias, a partir de relaciones semánticas y conceptuales.

La codificación se realizó manualmente, organizando la información en una matriz analítica que permitió visualizar la recurrencia, conexión y contraste entre los temas emergentes. Este proceso permitió profundizar en los sentidos atribuidos por el entrevistado al fenómeno estudiado, en diálogo con el marco teórico seleccionado. Aunque el estudio se basa en una única entrevista, se aplicaron criterios de saturación interna, asegurando la coherencia entre las categorías y la pregunta de investigación. Además, se trianguló con fuentes documentales secundarias para fortalecer la interpretación.

El alcance metodológico del estudio es descriptivo-exploratorio, dado que el objetivo principal es interpretar y comprender las problemáticas de la comunidad indígena en cuestión, identificando sus características y factores determinantes. Asimismo, se busca proponer soluciones que contribuyan a mitigar las dificultades observadas, a partir de los datos y la información obtenida tanto de la revisión bibliográfica como de la entrevista.

1.12. Las Comunidades de La Guajira: Actores Clave en el Entorno Fronterizo

La región de La Guajira se ha caracterizado por la diversidad de las comunidades que lo habitan, antes de la llegada de los españoles la región ya contaba con diversos grupos humanos distribuidos y organizados en todo el territorio. El mayor grupo humano son los Wayúu, con cerca de 144.003 personas, distribuidas en 18.211 familias, lo que representa el 48% de la población total del departamento. También se encuentran los Wiwa, Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Kinqui (Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC], 2020).

Durante el proceso de conquista y colonización, se realizaron diversos esfuerzos para integrar a estos grupos a las estructuras de control de la monarquía hispánica. Sin embargo, tales intentos no lograron su objetivo. Por el contrario, esta región se transformó

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

en un espacio donde la autoridad real era limitada y donde los marginados encontraban una relativa libertad. Ya en el siglo XVIII, se consolidó la noción de comunidades de frontera, no como parte de una línea divisoria precisa, sino como habitantes de los márgenes del reino, donde se aceptaba implícitamente la ausencia de control efectivo por parte de la corona (Trejos, 2014).

Estas dinámicas persistieron durante la república y aún persisten en la actualidad, aunque con mayores matices, pues desde sus comienzos la comunidad se permitió interpretar la forma en la que podían y debían sobrevivir cultural, social y políticamente. Durante los últimos cuatro años, esta capacidad de reinterpretación se ha evidenciado en la forma en que las comunidades indígenas y civiles de La Guajira han respondido a las medidas estatales para contrarrestar el narcotráfico, ya sea mediante su adaptación, negociación o resistencia frente a estas estrategias, integrando una perspectiva de gobernanza multiactor en la que los integrantes de las comunidades practican su agencia en el tejido social para apoyar o resistir a los proyectos estatales o de las instituciones que lo representan.

Esta interacción constante con un Estado que históricamente ha sido intermitente en su presencia ha consolidado formas propias de gobernanza local, redes de intercambio informales y estructuras comunitarias de protección, determinando una voz propia que en múltiples ocasiones ha reclamado la autonomía de sus la autodeterminación, su jurisdicción legal indígena, su gestión del medio ambiente, su soberanía alimentaria y el control político a través de sus propias autoridades. Su argumento se fundamenta principalmente en la influencia que los pueblos indígenas están recibiendo del contexto actual de los conflictos locales, nacionales e incluso internacionales, así como otras circunstancias específicas en la

región de tal manera que requiere ver la autonomía como un proceso complejo que trasciende marcos legales nacionales y supranacionales (Ulloa, A. 2011, p.79). Así, el rol de estas comunidades no puede entenderse únicamente desde una óptica asistencialista, sino desde su capacidad de agencia dentro de un contexto geopolítico complejo y en permanente disputa.

En este sentido, resulta imperante realizar una breve descripción del escenario en el que se desarrollan las interacciones que configuran el tejido social vigente en La Guajira durante el periodo 2021-2024, ya que la comprensión de su geografía permite explicar la creación y reproducción de la identidad cultural de la sociedad Wayúu asentada en este territorio.

En primer lugar, su ubicación al norte de la cordillera de los Andes contribuye a una morfología particular. El relieve de la Alta Guajira es producto de la interacción histórica entre diversos procesos geodinámicos sobre materiales litológicos, influenciados por el empuje ejercido por la placa del Caribe sobre el borde nororiental de la placa de Suramérica. Esta dinámica ha dado lugar a tres sistemas morfogénicos principales: litoral, depresión tectónica y montaña baja (Aponte, 2011, p. 163). Estas características hacen de este un entorno predominantemente árido, con altas temperaturas, con escasas lluvias, en Uribia, por ejemplo, se registra anualmente alrededor de los 300 mm. Administrativamente, limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del César y al suroeste con el departamento del Magdalena (Martínez, 2019).

Estas condiciones geográficas y climáticas han convertido al departamento en uno de los más vulnerables del país, su condición árida dificulta el acceso de agua potable a la población, aumentando las estadísticas asociadas a desnutrición producto de la inseguridad

alimentaria e hídrica. Algunos proyectos de organizaciones multilaterales como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) han trabajado para disminuir estas estadísticas, por ejemplo, entre 2021 y 2024 “18.000 personas lograron acceder a agua potable, saneamiento básico y prácticas adecuadas de higiene” por medio del programa “*Ayana ’ajirawa*” (trabajo en equipo) (UNICEF, 2024).

En este sentido, puede afirmarse que las vulnerabilidades del territorio de La Guajira son ampliamente reconocidas tanto por el Estado como por la comunidad internacional. Estas mismas debilidades también son identificadas por organizaciones criminales nacionales y transnacionales, que las aprovechan como una oportunidad para expandir sus operaciones, presentándose como una aparente alternativa para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región a través de su cooperación en las rutas del narcotráfico. Esto por supuesto suscita afectaciones claras en el tejido social de la comunidad Wayúu, su cultura y su economía, al integrarse a su propia agencia.

Un ejemplo de la interacción de las comunidades, el narcotráfico y la presencia de actores armados ilegales es el ocurrido en febrero de 2024, en el cual 80 familias de la etnia *Wiwa* se vieron obligadas a desplazarse desde la vereda El Limón, en Riohacha, hacia el municipio de Barrancas, debido a enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quienes disputaban el control territorial en la región (Defensoría del Pueblo, 2024). Aunque las mismas comunidades se han manifestado en contra de la instrumentalización de su territorio para este tipo de actividades, reclamando una mayor presencia del Estado, como el bloqueo de las vías efectuado por la comunidad Wayúu en varias ocasiones incluyendo las entradas a Riohacha y la carretera hacia Maicao, en protesta por la ausencia del Estado y

la vulneración de sus derechos, el aumento de la integración de las comunidades en actividades ilegales es notorio, lo cual sugiere una división en el mismo tejido social a causa de la evaluación de costo beneficio que se presenta a la hora de negociar o resistir a las acciones del bando legal o ilegal.

El contexto descrito permite identificar una cuestión central en la discusión, La Guajira no se puede describir como un escenario convencional del orden estatal, en los cuales la línea entre lo legal y lo ilegal está claramente delimitada por el poder normativo del Estado. Por el contrario, en este territorio prevalece una dinámica particular donde las normas válidas y su legitimidad son determinadas por los actores sociales según el tipo de actividad y quién la ejecuta, así como el lugar en el que la desarrollan.

Esta relativización de la legalidad se evidenció durante la sistematización y análisis de la entrevista realizada a una lideresa de la comunidad Wayúu. En su discurso emergió la categoría de *adaptación*, acompañada de códigos como subsistencia, economía local y abastecimiento, que reflejan cómo las prácticas cotidianas son interpretadas en función de las necesidades del territorio. Un ejemplo claro de esta lógica lo expresa la lideresa al referirse al transporte de gasolina:

Entonces ellos llevan su gasolina de aquí para allá, reúnen 14 o 15 pasajeros; algunos llevan sus pimpinas porque se necesitan tanto para la pesca, como para la planta o las motos. Hay personas que tienen su pequeña venta de gasolina, llevan 3 pipas cada pasajero y, si no tienen, uno lleva hasta de 60. Todo eso se reúne en un solo camión. Ahí es cuando dan positivo con esa gente, quitándoles el pan de cada día a personas que trabajan de esa manera. Si fuera de Uribia hacia el sur, yo diría que es contrabando, pero si es hacia allá, hacia Nazaret, eso es sobrevivencia. Muchas veces uno va, se acaba la gasolina, no venden, entonces uno manda a buscar en moto y resuelve la situación así.

Asimismo, esta declaración demuestra la jerarquización de las amenazas y la variación de su interpretación según los actores involucrados. La interacción con el espacio se configura a partir del entendimiento situado de quienes lo habitan o lo controlan. Para el indígena Wayúu que respeta sus tradiciones, el territorio tiene un significado ancestral y cultural; para los actores armados ilegales, como guerrillas o grupos criminales, representa una oportunidad estratégica y económica; mientras que, para las Fuerzas Armadas, constituye un espacio geopolítico que debe ser regulado conforme al orden institucional. Esta complejidad permite hablar de una triada de actores que operan bajo una lógica de gobernanza multiactor, donde coexisten y compiten diferentes formas de autoridad y normatividad dentro de un mismo espacio geográfico.

Esto a su vez, se puede complejizar si se cuestiona la condición de frontera en la que se encuentra el departamento, puesto que, las organizaciones criminales transnacionales han estudiado las debilidades del actuar estatal, estructuras como el “Tren de Aragua” han ganado presencia en los dos últimos años en el litoral controlando rutas, extorsionando a integrantes de la comunidad indígena y amedrentando a sus líderes para actuar con mayor libertad, como lo mencionó en la entrevista la líder social, en este momento, la presencia militar se ha reducido y la que se encuentra desplegada en la zona carece de los conocimientos necesarios para interactuar de forma efectiva en contra de la expansión de la criminalidad en la zona (entrevista líder Wayúu, mayo, 2025).

De manera que, la actuación de las Fuerzas Armadas ha venido en detrimento en los últimos cuatro años en la región de La Alta y la Media Guajira, llegando a vulnerar los Derechos Humanos fundamentales, en especial después del proceso de paz (Osorio García de Oteyza, Estupiñán, & Fuentes-Lara, 2021). Con o sin intención de hacerlo la falta de

preparación de los ejecutores ha generado una percepción negativa en la comunidad indígena, considerando al Ejército nuevamente dentro de la categoría de amenaza, dificultando que las operaciones se desplieguen para cumplir de manera efectiva con sus misiones, así lo relata la líder de la comunidad:

El Ejército lo van a ver como el malo del paseo, como lo hacía antes del 1991. Recuerda que antes del 1996 perdón, el Ejército era enemigo de los Wayúu. Eran los malos hasta yo que soy defensora número uno. Hoy en día yo crecí con ese pensamiento, pero ya uno ya preparándose. Como dando esa esa. Esa es todo el conocimiento para evitar lo malo hay que concientizar.

Además de las afectaciones directas en la cultura de la comunidad también existen afectaciones económicas en la comunidad Wayúu por la actuación de ambos actores, en la triada que se ha establecido, la comunidad queda en medio de los combates en varias ocasiones, intentando sobrevivir, razón por la cual, en la entrevista se visualiza muchas veces la expresión de amenaza, miedo, temor.

El panorama descrito evidencia que, para analizar el impacto de la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana durante el periodo 2021-2024, es fundamental considerar el rol que han desempeñado tanto las comunidades indígenas como la población civil de La Guajira en la configuración de la estrategia operativa.

2. Estrategias operativas frente al narcotráfico en la frontera Colombo-venezolana (2021–2024).

La descripción del departamento de La Guajira presentada previamente permite dimensionar las complejidades que subyacen de una mera exposición de características geográficas o demográficas, develando un territorio que ha sido históricamente marginado por el Estado, lo cual no implica una situación de pasividad por parte de sus habitantes. Al

contrario, la capacidad de agencia de sus habitantes, incluidas las comunidades indígenas y la población civil, desempeñan un papel determinante en la configuración de las dinámicas locales y en la construcción social de la realidad fronteriza.

En este sentido, cualquier estrategia operativa orientada a estudiar fenómenos como el narcotráfico debe reconocer y considerar estas dinámicas. De lo contrario, corre el riesgo de generar respuestas descontextualizadas e ineficaces que, lejos de mitigar las economías ilícitas, pueden convertirse en el aliciente de las lógicas criminales, afectando a las comunidades en su conjunto. Por esta razón, este apartado presenta un análisis crítico y riguroso de las estrategias operativas implementadas en la frontera colombo-venezolana entre 2021 y 2024 para combatir el narcotráfico. Se enfatiza en los actores involucrados y en la evolución de sus intervenciones, con el propósito de evaluar su eficacia en un contexto social, político y cultural profundamente complejo.

En primer lugar, es importante considerar que las estrategias operativas que se implementaron durante el periodo de estudio se enmarcan dentro del contexto del posacuerdo de paz firmado en el año 2016, en medio del cual se difundieron otro tipo de organizaciones armadas para ocupar el territorio donde las antiguas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ocupaban un lugar de poder. Así, organizaciones como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las FARC se comenzaron a ubicar y consolidar en regiones como La Guajira (International Crisis Group, 2023).

A estos grupos tradicionales se sumó la intromisión de organizaciones criminales transnacionales como el “Tren de Aragua” debido al aumento de su participación en el narcotráfico trazando rutas de tráfico entre la Alta Guajira y Venezuela, convirtiendo la

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

zona de frontera en una zona estratégica para sus actuaciones al margen de la ley de ambos Estados. Este grupo que inició como una banda criminal en Venezuela ha logrado expandirse por la región e incluso por diferentes partes del país ampliando cada vez más su portafolio criminal llegando a la comercialización de estupefacientes a gran escala (InSight Crime, 2024).

Además, se encuentran grupos paramilitares que operan en la zona, entre ellos: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN); Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) - Clan del Golfo y el Cartel de La Guajira originario de Maicao dedicado al contrabando de armas, minerales, vehículos robados, ganado y narcóticos. También involucrado en actividades como extorsión, sicariato y secuestro. El cartel opera tanto en Colombia como en Venezuela, utilizando rutas que atraviesan La Guajira para el tráfico de drogas hacia el Caribe y Europa.

En este sentido, las dinámicas de conflicto han generado en el departamento de La Guajira dos nodos de conflicto, según el informe de INDEPAZ, presentado en el año 2021-2022. El primero se configura “por la disputa entre las AGC y Los Pachencas (también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -ACSN-)” (Barney, 2021, p. 6). Esta ruptura entre estos grupos, antes aliados en el negocio del narcotráfico, se originó en disputas por el control territorial tras la extradición de alias *La Silla*, líder de una red responsable de cerca del 40% del tráfico de drogas desde Santa Marta. Su ausencia generó un vacío de poder que intensificó la confrontación entre ambas estructuras, manifestada en traiciones, asesinatos selectivos, capturas de figuras clave y enfrentamientos armados. Esta disputa se ha traducido en amenazas, homicidios y desplazamientos

forzados, como el ocurrido en abril de 2022, cuando 350 campesinos huyeron de la vereda La Secreta en medio de combates entre estos grupos (Indepaz, 2022, p. 22).

Considerando las amenazas, el Estado colombiano ha decidido implementar diversas estrategias operativas para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en la región, para ser más específicos se identificaron cinco principales: la primera denominada “Plan de Campaña Conjunto Ayacucho (2023–2026)” una estrategia implementada en todo el territorio nacional, pero con una atención especial en La Guajira, en ella se incluyó el “Plan 16.000”, que busca reemplazar a soldados regulares por más de 70 soldados profesionales en municipios como Riohacha, Dibulla y Manaure. El objetivo es fortalecer la presencia institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante factores de inestabilidad que afectan al departamento (Gobernación de La Guajira, 2024).

La segunda estrategia se relaciona con operaciones de la Armada de Colombia y la Policía Nacional, enfocadas en la seguridad, ambas instituciones, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, han desarrollado operaciones conjuntas para desarticular estructuras narcotraficantes en La Guajira. Estas acciones han incluido la captura de integrantes de organizaciones dedicadas al transporte y acopio de sustancias ilícitas, aprovechando el entorno geográfico de la Alta Guajira para el envío de estupefacientes hacia el Caribe, Centroamérica y Europa (Armada de Colombia, 2023).

La tercera estrategia se planeó desde la gobernación para reafirmar la seguridad en la región, con iniciativas como el Escuadrón de Seguridad Vial, enfocadas en garantizar la seguridad en las vías del departamento. El “Plan 100 días La Guajira Segura” Una estrategia integral para mejorar la seguridad en zonas urbanas y rurales. “Cuéntale al Comandante de tu Barrio” un programa de Policía Comunitaria que busca fortalecer la

relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Todas las iniciativas se han implementado con las herramientas tecnológicas disponibles en la gobernación, como cámaras y drones para monitorear la región y atender de manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía (Gobernación de La Guajira, 2024).

La cuarta estrategia se ha enfocado en atacar el microtráfico, de la mano de la Policía Nacional se han llevado a cabo operativos para afectar las estructuras criminales dedicadas al microtráfico en La Guajira. En 2023, se logró la incautación de más de 3.255 kilos de marihuana, 636 kilos de clorhidrato de cocaína y la captura de 109 personas por el delito de tráfico de estupefacientes (Cifuentes, 2025).

La quinta estrategia se enfoca en la campaña de prevención y denuncia el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Comunitaria, ha lanzado campañas de prevención dirigidas a comerciantes y ciudadanos para sensibilizar sobre las distintas modalidades de extorsión. Además, se ha implementado un sistema de atención directa mediante la línea 165 y un código QR, bajo la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, para facilitar la denuncia de estos casos (Mazo, 2024).

Estas estrategias, si bien han sido diseñadas con objetivos específicos orientados al combate del narcotráfico y a la contención de sus impactos en la región, no han demostrado ser suficientemente eficaces en su implementación, especialmente cuando se considera la complejidad social y cultural de las comunidades afectadas. Un caso paradigmático es el de la comunidad indígena Wayúu, cuya realidad sociopolítica y cosmovisión han sido sistemáticamente ignoradas en el diseño de las acciones operativas.

Tal como lo expresó una líder comunitaria entrevistada en el marco de esta investigación, las intervenciones estatales y militares se han desarrollado desde una lógica externa e impositiva, sin incorporar el conocimiento local ni reconocer las dinámicas estructurales propias de la comunidad. Esta exclusión ha derivado no solo en la ineficiencia de los operativos, sino también en una mayor fragmentación del tejido social, ya que algunas estrategias han terminado por estigmatizar a la población o facilitar, sin proponérselo, la cooptación de miembros de la comunidad por redes criminales.

El impacto se demuestra con mayor ahínco en la juventud de ambas partes, por un lado, los integrantes jóvenes de las Fuerzas Militares, no se instruyen lo suficiente para actuar conjuntamente con la comunidad, respetando los valores y las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas. Por otro lado, la juventud de las comunidades indígenas ha aumentado su nivel de participación en las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, como lo señaló la entrevistada.

En este sentido, la falta de enfoque intercultural y la escasa participación de actores locales en la formulación e implementación de políticas de seguridad han limitado considerablemente el alcance y la sostenibilidad de los resultados. Lejos de generar confianza y cohesión, muchas de estas acciones han profundizado la desconfianza hacia las instituciones del Estado, debilitando su legitimidad y obstaculizando la colaboración activa de la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico.

3. Interacciones: comunidades indígenas, población civil y Fuerzas Operativas, unidas en la lucha contra el narcotráfico.

Sobre esta base, resulta clave analizar las formas concretas en que las interacciones entre comunidades, fuerzas operativas y actores civiles configuran el entramado estratégico en el

territorio. En este escenario, las interacciones entre las comunidades indígenas, la población civil y las fuerzas operativas desplegadas para contrarrestar el narcotráfico adquieren un carácter central, no solo por su incidencia directa en el desarrollo de las acciones de control, sino también por su impacto en la legitimidad y efectividad de dichas estrategias.

Estas relaciones pueden dar lugar tanto a oportunidades de cooperación como a escenarios de tensión que inciden directamente en la gobernanza territorial y en los resultados de la intervención estatal. En ese orden de ideas, el presente apartado se propone analizar tales interacciones, con el fin de identificar los factores que potencian o limitan la articulación entre actores, así como las implicaciones de estas dinámicas en el diseño e implementación de estrategias operativas en contextos atravesados por economías ilícitas.

Para empezar, es importante reconocer que el Ejército Nacional ha desempeñado un rol significativo en la implementación de estrategias operativas orientadas a prevenir la consolidación de las actividades ilegales y promover una mejor calidad de vida en territorios como La Guajira. Esto considerando que la institución castrense es consciente de “sus efectivas contribuciones al desarrollo sostenible o sustentable (equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental) dan cabal cumplimiento a los anhelados propósitos de toda empresa: mejora continua en desarrollo, competitividad, valoración y objetivos misionales” (Castro Torres, Zárate, Ballen & Suárez, 2017)

En el estudio “El rol militar en la consolidación institucional de los territorios” (Sánchez, 2023), se expone el Control Institucional del Territorio (CIT) como una herramienta integradora que articula actores civiles y militares, en consonancia con los principios establecidos tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. Si bien este enfoque no es completamente novedoso, pues desde la década de 1960 el Ejército ha

tenido una participación activa en labores sociales, en las últimas décadas se ha evidenciado una evolución hacia formas de relacionamiento más integrales con las comunidades, con resultados dispares según los contextos y las condiciones específicas de cada intervención.

En el caso particular de La Guajira, estas intervenciones han tenido resultados diversos. En algunos escenarios, el Ejército ha logrado establecer en su plan un “trabajo sensibilizar a las personas en la reconstrucción del tejido social con bases sólidas, donde se evidencia un escenario de contraposiciones políticas, sociales, económicas y religiosas.” (Sánchez et al., 2020, p. 190). Estas acciones se han visto reflejadas, al menos parcialmente, en indicadores de desarrollo: según el Informe Nacional de Desarrollo Humano (Gobernación de La Guajira, 2024), el índice pasó de 0.600 en 2002 a 0.617 en 2022. Aunque representa una mejora, este avance sigue siendo inferior al promedio nacional, lo que sugiere que las transformaciones no han sido estructurales ni sostenibles en todos los frentes.

Este dato cobra mayor relevancia al considerar los datos obtenidos del testimonio analizado durante esta investigación. La líder social de la región señaló que la mejora en las condiciones de vida no se debe necesariamente a una presencia más activa del Estado ni a una colaboración estrecha con las Fuerzas Militares, sino al fortalecimiento de vínculos con actores ilegales que operan en la zona. Desde su perspectiva, la economía del narcotráfico ha proporcionado recursos y comodidades que el Estado no ha logrado garantizar. Este tipo de interacción evidencia una paradoja preocupante: mientras el tejido social se recompone en términos materiales, se transforma su estructura simbólica y valorativa, al reemplazar cosmovisiones ancestrales por lógicas mercantiles ligadas a economías ilícitas.

Esta situación plantea serios desafíos a la efectividad de las estrategias operativas del Estado. Por un lado, las comunidades, particularmente la población joven, se están distanciando de las iniciativas preventivas impulsadas por las Fuerzas Militares, a las cuales tienden a percibir como fuerzas externas, invasoras o desconectadas de sus realidades culturales debilitando los avances que se habían consolidado entre las comunidades indígenas y las FFMM (Celis Manrique, 2022). Por otro lado, el narcotráfico no solo se infiltra como una estructura económica, sino también como un referente de organización social. Esto redefine los canales de autoridad y pertenencia en los territorios, debilitando el papel de las instituciones formales.

A esta problemática se suma la limitada preparación sociocultural de muchos de los jóvenes militares desplegados en la región. La ausencia de formación intercultural y de habilidades para la construcción de confianza y cooperación con las comunidades locales ha contribuido a la reproducción de dinámicas de desconfianza, distanciamiento y confrontación. En lugar de ser percibidos como aliados para el desarrollo, muchos operativos militares son vistos como imposiciones externas, ajenas a las lógicas comunitarias y desvinculadas de la complejidad que implica la presencia estructural del narcotráfico en la vida cotidiana indígena.

En lo que respecta a la población civil no indígena, las interacciones con el nuevo enfoque de seguridad humana, que amplía el concepto tradicional de seguridad hacia dimensiones como la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y otros derechos básicos, ratificada a través de la sentencia T-302 de 2017, que buscó mayor integración de las comunidades, han sido igualmente complejas (Corte Constitucional de Colombia, 2017). Aunque algunos programas han intentado responder a estas necesidades, la limitada

continuidad institucional, las brechas de coordinación interagencial y la debilidad en la apropiación comunitaria han dificultado su consolidación. La ausencia de una articulación sólida entre las estrategias de seguridad y las políticas sociales ha contribuido a que la intervención estatal en estos territorios sea percibida como fragmentada, ineficiente o meramente reactiva.

Esto permite concluir que, el análisis de las interacciones entre las comunidades indígenas, la población civil y las Fuerzas Militares en La Guajira revela un panorama ambivalente, donde coexisten intentos legítimos de articulación institucional con profundas tensiones derivadas de la presencia de economías ilegales y la débil conexión entre actores. Identificar con mayor precisión los factores que fortalecen la cooperación o acentúan los conflictos entre estos sectores resulta clave para rediseñar estrategias operativas más sensibles al contexto, culturalmente pertinentes y orientadas no solo a la represión del narcotráfico, sino también a la transformación estructural de las condiciones que lo sustentan.

Conclusiones

Con base en el análisis expuesto anteriormente, se presentan a continuación las principales conclusiones del estudio. El desarrollo de los objetivos específicos logró demostrar puntos importantes que deben ser incluidos en las discusiones actuales en la situación de la Guajira como territorio fronterizo, con potencial estratégico y geopolítico.

Uno de los principales hallazgos consiste en el reconocimiento de que La Guajira no puede entenderse como una frontera convencional bajo los parámetros del control estatal exclusivo. Su trayectoria histórica, marcada por una presencia intermitente del Estado, ha propiciado una territorialidad alternativa, en la que las comunidades indígenas y civiles han

desarrollado formas propias de agencia y regulación sociopolítica. En este contexto, la gobernanza no está determinada exclusivamente por estructuras estatales con un poder ejercido de forma vertical, sino que opera a través de redes informales, mecanismos comunitarios y negociaciones con actores legales e ilegales. La noción de “territorialidad cultural” se impone sobre la legalidad formal.

En segundo lugar, el análisis de las estrategias operativas implementadas en la región evidencia que, si bien existen esfuerzos institucionales para frenar el avance del narcotráfico, estos se han aplicado desde una lógica vertical, sin considerar suficientemente las particularidades socioculturales del territorio. La exclusión de los saberes locales y la limitada formación intercultural de las Fuerzas Militares han debilitado su legitimidad y efectividad. Esto ha generado un doble efecto: por un lado, ha facilitado la instrumentalización de las comunidades por parte de redes criminales; por otro, ha provocado una creciente distancia entre la población, en especial la juventud indígena, y las iniciativas estatales de seguridad.

La investigación también logró evidenciar cómo las economías ilegales han sido incorporadas por segmentos de la comunidad no solo como estrategias de subsistencia, sino también como vías de ascenso social, desplazando valores tradicionales y reconfigurando el tejido simbólico de las comunidades. Esta resignificación del narcotráfico como oportunidad ha sido favorecida por las condiciones estructurales de pobreza, inseguridad hídrica y abandono institucional, las cuales han sido aprovechadas por grupos ilegales para establecer sistemas de control paralelos.

En términos estratégicos, los resultados indican que la lucha contra el narcotráfico no puede concebirse exclusivamente desde la dimensión militar-operativa. Requiere de un

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

enfoque integral que articule seguridad, desarrollo y participación comunitaria, bajo principios de respeto cultural y corresponsabilidad. La construcción de estrategias operativas debe incorporar a los actores locales desde el diseño hasta la implementación, reconociendo su capacidad de agencia y su conocimiento del territorio.

En vista de los hallazgos obtenidos, una propuesta derivada de esta investigación consiste en fortalecer los programas de formación e instrucción dirigidos a los integrantes del Ejército Nacional que participan en las estrategias operativas en La Guajira. Estos programas deben incorporar contenidos que permitan comprender la complejidad social, cultural y geopolítica del territorio, facilitando así un proceso más efectivo de familiarización y trabajo conjunto con las comunidades. Este enfoque contribuiría a restablecer la confianza institucional por parte tanto de la población civil como de las comunidades indígenas, reconociendo que, según múltiples estudios, las intervenciones en contextos sensibles logran mejores resultados cuando las comunidades son integradas de manera activa tanto en el diseño como en la implementación de las acciones operativas.

Finalmente, este estudio deja abiertas varias líneas de investigación, entre ellas: el análisis comparativo con otras zonas fronterizas con dinámicas similares, la evaluación de los procesos de cooptación simbólica por parte de redes ilegales, y la formulación de programas de formación intercultural para el personal militar. Asimismo, se recomienda profundizar en el diseño de mecanismos de gobernanza híbrida, donde el Estado y las comunidades compartan responsabilidades en la gestión territorial y la contención de economías ilícitas. Para lograrlo, esta investigación recomienda realizar un trabajo más exhaustivo en el campo, la escucha activa de las necesidades de la comunidad evidencia

una parte fundamental en el desarrollo de estrategias operativas tanto del Estado como del Ejército nacional.

Referencias

- Armada de Colombia. (2023, enero 30). Operaciones de la Armada de Colombia efectivas y contundentes contra el narcotráfico. <https://www.armada.mil.co/es/content/operaciones-armada-colombia-efectivas-y-contundentes-contra-narcotrafico>
- Aponte, M. (2011). Organización espacial de la región geográfica de la Alta Guajira colombiana. *Perspectiva Geográfica*, 1(15), 157–176. <https://doi.org/10.19053/01233769.1737>
- Barney, J. (2021). La Guajira, entre un nuevo aire o un desastre: Panorama actual de la violencia en la Guajira con la llegada de las empresas energéticas al territorio Wayuu. Indepaz. <https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/04/LA-GUAJIRA-BUSCA-UN-NUEVO-AIRE-.pdf>
- Castro Torres, I., Zárate, D., Ballen, H., & Suárez, Y. (2017). *Responsabilidad social en el Ejército Nacional*. Ejército Nacional de Colombia.
- Celis Manrique, M. A. (2022). Análisis del fortalecimiento de las relaciones civiles-militares entre las comunidades indígenas y las FFMM. *Estado, Paz y Sistema Internacional*, 1(1), 27-51. <https://doi.org/10.25062/2981-3034.4182>
- Cifuentes Quintero, S. (2025, marzo 15). Golpe al narcotráfico en La Guajira: Policía incauta 635 kilos de cocaína ocultos en un bus. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2025/03/15/golpe-al-narcotrafico-en-la-guajira-policia-incauta-635-kilos-de-cocaina-ocultos-en-un-bus/>
- Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. (s. f.). *Reorientación de la Estrategia de las Fuerzas Militares de Colombia*. Recuperado de <https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/noticias/reorientacion-de-la-estrategia-de-las-fuerzas-militares-de-colombia>
- Corte Constitucional de Colombia. (2017, 8 de mayo). *Sentencia T-302 de 2017* [PDF]. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/06/T-302-de-2017_Guajira.pdf
- Defensoría del Pueblo. (2024, 26 de febrero). Combates entre grupos armados en La Guajira obligaron a 80 familias de comunidad indígena a desplazarse. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/-/combates-entre-grupos-armados-en-la-guajira-obligaron-a-80-familias-de-comunidad-indigena-a-desplazarse>

Gobernación de La Guajira. (2024, octubre 2). En La Guajira se refuerza la seguridad con más de 70 soldados profesionales.

<https://www.laguajira.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/la-guajira-refuerza-la-seguridad-con-mas-de-70-soldados-profesionales.aspx>

Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

InSight Crime. (2024, abril 22). Autoridades de Colombia exponen aumento de participación del Tren de Aragua en narcotráfico.

<https://insightcrime.org/es/noticias/autoridades-colombia-exponen-aumento-participacion-tren-de-aragua-narcotrafico/>

International Crisis Group. (2023). Trapped in Conflict: Reforming Military Strategy to Save Lives (Informe N.º 95). <https://www.crisisgroup.org/es/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/95-trapped-conflict-reforming-military-strategy-save-lives>

Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. (2023, 22 de febrero). Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021 – 2022 (1): Desafío a la paz total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro. Indepaz. Recuperado de <https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/>

Mazo González, D. (2024, agosto 24). Gaula reforzó su plan de acción en La Guajira ante preocupante incremento de extorsiones. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2024/08/24/gaula-reforzo-su-plan-de-accion-en-la-guajira-ante-preocupante-incremento-de-extorsiones/>

Martínez Ortiz, A. (2019). La Guajira: Caracterización departamental y municipal. Fedesarrollo. Informe presentado a Cerrejón Minería Responsable.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). La frontera como método, o la multiplicación del trabajo. Tinta Limón.

renate Mayntz (2008). Public management and the metagovernance of hierarchies, networks and markets: The feasibility of designing and managing governance style combinations. Springer.

Osorio García de Oteyza, M., Estupiñán Estupiñán, Óscar J., & Fuentes-Lara, M. C. (2021). Retos de paz y derechos humanos en la comunidad Wayúu en la Alta Guajira (Colombia). *Revista De Paz Y Conflictos*, 13(2), 25–51. <https://doi.org/10.30827/revpaz.v13i2.11247>

Organización Nacional Indígena de Colombia. (s.f.). Wayuu. Recuperado el 21 de abril de 2025, de <https://www.onic.org.co/pueblos/1156-wayu%CC%81u>

- Ratzel, F. (2011). Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía Política científica. *Geopolítica(s): revista de estudios sobre espacio y poder*, 2(1), 135. https://doi.org/10.5209/rev_GEOP.2011.v2.n1.37901
- Sánchez Medina, G. P., Botero Grisales, M. A., Gómez Restrepo, J. A., & Rubio Villa, M. G. (2020). Ejército Nacional de Colombia como un actor importante en la reconstrucción del tejido social de la comunidad wayúu en La Guajira. En D. F. Gálviz Cataño, A. Corredor Gómez, & D. M. Lopera Montoya (Eds.), *Malouyen Guajira, una perspectiva interdisciplinar desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible* (pp. 187–204). Corporación Universitaria Americana.
- Sánchez Moreno, E. (2023). El rol militar en la consolidación institucional de los territorios [Tesis de maestría, Universidad del Rosario]. Repositorio EdocUR. <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/23507c19-8e8a-48d7-aade-48b79d8b01fd/content>
- Serje, M. (2005). *El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Universidad de los Andes.
- Serje, M. (2012). *El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las “zonas de frontera” en Colombia*. *Cahiers des Amériques latines*, (71). Publicado en línea el 1 de enero de 2014. <http://journals.openedition.org/cal/2679>
<https://doi.org/10.4000/cal.2679>
- Sotomayor, O., Rodrigues, M., Rodríguez, A., Wander, P., & Sánchez, J. (2023). Gobernanzas multiactor y multinivel para las políticas de desarrollo productivo en agrocadenas y territorios rurales (Libros de la CEPAL, N° 162, LC/PUB.2023/17-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://issuu.com/publicacionescepal/docs/s2300244_es
- Trejos Rosero, L. F., & Luquetta Cediell, D. J. (2014). Una aproximación a la ilegalidad, el crimen organizado y ausencia estatal en la frontera colombo-venezolana. El caso del departamento de La Guajira en Colombia. *Memorias (Barranquilla, Colombia)*, 11(24), 125-148. <https://doi.org/10.14482/memor.24.6460>
- TUNANDER, O. (2001). Swedish-German geopolitics for a new century: Rudolf Kjellén's 'The State as a Living Organism.' *Review of International Studies*, 27(3), 451–463. <https://doi.org/10.1017/S026021050100451X>
- UNICEF Colombia. (2024, 30 de agosto). Sin el agua no podríamos vivir. UNICEF. <https://www.unicef.org/colombia/historias/sin-el-agua-no-podr%C3%ADamos-vivir>
- Ulloa, A. (2011). The Politics of Autonom of Indigenous Peoples of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia: A Process of Relational Indigenous Autonomy. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 6(1), 79–107. <https://doi.org/10.1080/17442222.2011.543874>

